

(Bruselas) – La Unión Europea debe presionar al gobierno de la India para que actúe de inmediato para poner fin a las graves violaciones de los derechos humanos en el país, dijeron hoy cinco organizaciones, antes del diálogo sobre derechos humanos entre la UE y la India programado para el 20 de agosto de 2024.

El gobierno de la India debe revertir sus leyes y políticas abusivas y discriminatorias contra musulmanes, cristianos y otras minorías; poner fin a las restricciones a los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica; y liberar a todos los defensores de los derechos humanos, periodistas y otras personas detenidas por ejercer sus derechos humanos básicos.

Los grupos son Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Front Line Defenders, Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y CSW (Christian Solidarity Worldwide).

El diálogo anual entre la UE y la India sobre derechos humanos es una oportunidad importante, aunque insuficiente , para que tanto la UE como la India expresen sus preocupaciones en materia de derechos humanos, afirmaron las organizaciones. La UE debería pedir al gobierno indio que defienda los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de religión, mientras que el gobierno indio debería plantear su preocupación por el aumento de los ataques racistas y xenófobos en muchas partes de Europa, especialmente contra inmigrantes y minorías.

En junio, el primer ministro indio Narendra Modi y su partido Bharatiya Janata (BJP), de mayoría hindú, volvieron al poder para un tercer mandato consecutivo. Durante la campaña electoral, Modi y otros dirigentes

del BJP hicieron reiteradas declaraciones que incitaban a la hostilidad y la violencia contra los grupos marginados, especialmente los musulmanes. Estos discursos incendiarios, en medio de una década de ataques y discriminación contra las minorías bajo el gobierno de Modi, han normalizado los abusos contra musulmanes, cristianos y otros grupos.

En la última década, la administración de Modi ha adoptado leyes y políticas que discriminan sistemáticamente a las minorías religiosas, incluida en particular la Ley de Enmienda de la Ciudadanía, que excluye de hecho a los solicitantes de asilo musulmanes. Varios gobiernos estatales del BJP han demolido viviendas, negocios y lugares de culto musulmanes sin el debido proceso, como lo demuestra la evidencia de castigo colectivo contra la comunidad musulmana por enfrentamientos comunales o disidencia. Algunos funcionarios del BJP han descrito estas acciones como una “justicia avasalladora”. La violencia contra las minorías religiosas también ha continuado desde las elecciones, con al menos 28 ataques reportados en todo el país, que resultaron en la muerte de 12 hombres musulmanes y una mujer cristiana.

El gobierno indio ha intensificado su represión contra los medios de comunicación, los oponentes políticos y los medios de comunicación. sociedad civil grupos, y está utilizando acusaciones de irregularidades financieras e incluso su draconiana ley antiterrorista para acosar y procesar a activistas de derechos humanos, periodistas, estudiantes, críticos del gobierno, manifestantes pacíficos y miembros de comunidades minoritarias.

El Grupo de Acción Financiera Internacional, del que es miembro la Comisión Europea, una organización intergubernamental que trabaja para combatir las amenazas al sistema financiero mundial, ha

recomendado que la India establezca medidas para evitar el abuso de las políticas antiterroristas contra grupos no gubernamentales.

El gobierno indio utiliza repetidamente su Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras (FCRA), una ley que regula la financiación extranjera a las organizaciones no gubernamentales, para cancelar arbitrariamente licencias y cerrar la financiación extranjera . Más de 20.600 organizaciones no gubernamentales han perdido sus licencias en la última década, muchas de ellas grupos que han promovido durante mucho tiempo los derechos humanos y la democracia.

En julio, el gobierno indio promulgó tres nuevas leyes penales –Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) y Bharatiya Sakshya Adhinayam (BSA)– que sustituyeron al código penal indio, al código de procedimiento penal y a la Ley de pruebas de la India. Las nuevas leyes amplían los poderes de la policía, lo que genera preocupación por su utilización para vulnerar los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y juicio justo.

El nuevo Código de Procedimiento Penal (BNSS, por sus siglas en inglés) permite a la policía solicitar la detención de un acusado durante 15 días en cualquier momento antes de que se complete el período de prisión preventiva permitido de 40 a 60 días, en lugar de sólo las dos semanas siguientes al arresto, lo que aumenta el riesgo de tortura y otros malos tratos. El gobierno del BJP ha afirmado que el nuevo código penal (BNSS, por sus siglas en inglés) suprime la cláusula de sedición de la era colonial , pero los críticos han señalado que la nueva disposición que castiga “actos que pongan en peligro la

soberanía, la unidad y la integridad de la India” es una repetición de la abusiva ley de sedición .

El gobierno indio también ha introducido leyes y políticas para permitir un mayor control gubernamental sobre el contenido en línea, como las Normas de Tecnología de la Información , que amenazan con debilitar el cifrado y socavar gravemente las libertades de prensa, el derecho a la privacidad y la libertad de expresión en línea. Las autoridades indias tienen un historial de aplicación de estas leyes para bloquear el contenido en línea crítico con el gobierno.

La India bloquea Internet más que cualquier otro país . Estos bloqueos no solo restringen las libertades fundamentales, sino que también afectan desproporcionadamente a las comunidades que viven en situación de pobreza y que dependen de Internet para acceder a las medidas de protección social del gobierno, negándoles el acceso a alimentos y medios de vida .

El estado de Manipur, en el noreste de la India, se ha visto sacudido por la violencia étnica entre la comunidad mayoritaria meitei, que es mayoritariamente hindú, y los grupos tribales kuki, que son mayoritariamente cristianos, desde mayo de 2023. Más de 200 personas han muerto, más de 60.000 han sido desplazadas y cientos de casas e iglesias han sido destruidas. Las autoridades indias no han logrado poner fin a la violencia , mientras que el gobierno del estado de Manipur sigue protegiendo a grupos violentos, como Arambai Tenggol y Meitei Lippun, que apoyan a la comunidad dominante meitei.

Cinco años después de revocar el estatus de autonomía especial de la región el 5 de agosto de 2019, el gobierno indio no ha restablecido la libertad de expresión y

asociación en Jammu y Cachemira. Las restricciones a los medios de comunicación en la región son cada vez mayores y varios periodistas y defensores de los derechos humanos han sido detenidos por falsas acusaciones de terrorismo. Las autoridades no han tomado medidas adecuadas para proteger a la minoría hindú de los ataques de los militantes.

El gobierno indio también ha utilizado la ley antiterrorista, la Ley de Prevención de Actividades Ilícitas, para arrestar a 16 destacados activistas que promovían los derechos de las comunidades dalit y adivasi (indígenas), gravemente marginadas de la India. Aunque los tribunales han concedido la libertad bajo fianza a seis personas tras varios años en prisión, nueve activistas siguen detenidos sin juicio. Stan Swamy, un sacerdote jesuita que defendía los derechos de las comunidades adivasi, murió bajo custodia . Los tribunales han cuestionado repetidamente las pruebas en su contra. Según informes de la empresa forense estadounidense Arsenal Consulting, se utilizó un malware para vigilar y plantar pruebas en los ordenadores de al menos tres personas acusadas en este caso.

El gobierno indio se enfrenta a crecientes acusaciones de represión transnacional, cometiendo graves abusos más allá de sus fronteras. Varios gobiernos han acusado a las agencias de inteligencia indias de perseguir a sospechosos de terrorismo y líderes separatistas para asesinarlos en Canadá, Estados Unidos y Pakistán . India también ha atacado a sus críticos en la diáspora cancelando visas a indios en el extranjero y prohibiéndoles entrar al país.

En enero, el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre las relaciones entre la UE y la India en la que se

planteaban cuestiones urgentes en materia de derechos humanos, como la “violencia, la creciente retórica nacionalista y las políticas divisivas” contra las minorías. El Parlamento Europeo recomendó que el Diálogo sobre Derechos Humanos entre la UE y la India se convirtiera en un diálogo bianual en las sedes, precedido por un diálogo con la sociedad civil “que establezca compromisos concretos y puntos de referencia para el progreso”.

La UE debería garantizar la supervisión pública y la rendición de cuentas en relación con su política en la India. La UE debería hacer un seguimiento de los resultados de este diálogo tanto en sus comunicaciones públicas como en sus esfuerzos diplomáticos, e integrar las lecciones aprendidas en la estrategia de la UE en materia de derechos humanos en el marco más amplio de la Agenda Estratégica UE-India prevista .

Como cuestión prioritaria, la UE debería instar al gobierno indio a:

- Liberar inmediatamente a todos los defensores de derechos humanos, periodistas y otros críticos detenidos arbitrariamente.**
- Derogar o modificar las leyes represivas utilizadas contra las minorías y aquellas utilizadas para silenciar el disenso tanto en línea como fuera de línea.**
- Implementar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y realizar una evaluación adecuada y transparente basada en riesgos antes de someter a las organizaciones sin fines de lucro a leyes demasiado amplias, como la FCRA.**

- **Condenar públicamente los ataques contra las minorías religiosas y procesar adecuadamente a los responsables.**
- **Instruir a los gobiernos estatales para que pongan fin al castigo arbitrario y colectivo de las comunidades minoritarias, incluso mediante la llamada “justicia de excavadora”.**
- **Garantizar que las fuerzas de seguridad que cometen violaciones de los derechos humanos rindan cuentas.**
- **Conceder acceso a todos los expertos independientes de las Naciones Unidas y a los mecanismos internacionales de vigilancia de los derechos humanos, incluso en Jammu y Cachemira y Manipur.**